

5

Mayo
2007

la Tendencia
— revista de análisis político —

Director

Francisco Muñoz Jaramillo

Editor general

Ángel Enrique Arias

Consejo editorial

Jaime Arciniegas, Augusto Barrera
Jaime Breilh, Marena Briones, Carlos Castro
Galo Chiriboga, Eduardo Delgado
Julio Echeverría, Miryam Garcés
Luis Gómez, Ramiro González
Virgilio Hernández, Guillermo Landázuri
Luis Maldonado Lince, René Maugé
Paco Moncayo, René Morales
Melania Mora, Marco Navas
Gonzalo Ortiz, Nina Pacari
Andrés Páez, Alexis Ponce
Rafael Quintero Quintero, Eduardo Valencia
Andrés Vallejo, Raúl Vallejo
Gaitán Villavicencio

Coordinador editorial

Álvaro Campuzano

Diseño y diagramación

Fraktal – Francis Hernández

Fotografías

Archivo Ildis

www.rafaelcorrea.com/galeria/index.php

Auspicio

ILDIS-FES

Av. Republica 500, Edif. Pucará
Teléfono: (593) 2 250 9608
Quito – Ecuador

Edición y Distribución

Editorial TRAMASOCIAL
Reina Victoria N 21-141 y Robles
Edificio Proinco II, piso 6, Oficina 6B
Teléfono: (593-2) 2 255 2936
Quito – Ecuador
tramasocial@andinanet.net

Impresión

Gráficas Araujo
2471047 / 09 6012237

Los editores no comparten, necesariamente, las opiniones vertidas por los autores, ni éstas comprometen a las instituciones a las que prestan sus servicios. Se autoriza citar o reproducir el contenido de esta publicación, siempre y cuando se mencione la fuente y se remita un ejemplar a la revista.

laTendencia
— revista de análisis político —

c de esta edición: cada autor

ISSN: 13902571

Mayo 2007

Editorial	5
-----------	---

ANÁLISIS DE COYUNTURA

Orden, seguridad e institucionalidad en el gobierno de Correa Jorge León T.	7
Cien días intensos y eficaces de Gobierno Galo Chiriboga Zambrano	15
Perspectivas políticas tras los primeros días de gobierno Carlos Castro Riera	19
Cuatro lecciones de la consulta popular del quince de abril Pablo Ospina Peralta	25
UNASUR: la coordinada bolivariana Napoleón Saltos Galarza	30
'Acuerdo País': una opción ciudadana radical Fernando Cordero Cueva	36
La responsabilidad de ir juntos a la Asamblea Nacional Constituyente Norman Wray	40

ACTUALIDAD DE LAS IZQUIERDAS

9 Reflexiones sobre la izquierda latinoamericana actual Julio Echeverría	42
'Posneoliberalismo' y 'neodesarrollismo': ¿Las nuevas coordenadas de acción política de la izquierda latinoamericana? franklin ramírez gallegos	51
El desafío de la unidad Juan Cuvi	57
Democracia y sociedad mundial: reflexiones desde la socialdemocracia Christoph Zoepel	62

Hacia un nuevo socialismo democrático	68
Xavier Buendía Venegas	

DEBATE SOBRE LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Las izquierdas y la constituyente	71
Francisco Muñoz J.	
Hacia una nueva inserción en el contexto global y regional	75
Pablo Andrade	
Hacia un nuevo esquema de regulación económica: re-definición del papel regulador del Estado	80
Pedro Páez	
Pobreza, inequidad social, empleo y desarrollo: propuestas para la constituyente	86
Carlos Larrea	
Encuentro Internacional “Experiencias Constitucionales en América Latina”	92
Néstor Raúl Correa	
La constituyente y la nueva constitución	98
Julio Cesar Trujillo	
Los retos de la próxima Asamblea Nacional Constituyente en torno a las definiciones del nuevo ordenamiento jurídico nacional	103
Diego Pazmiño V.	
Las mujeres ecuatorianas, la constituyente y la constitución	109
Rocío Rosero Garcés	
Una propuesta a la asamblea desde las mujeres autoridades locales	114
Margarita Carranco	
Propuesta de la Confederación de Trabajadores del Ecuador	119
CTE	

Orden, seguridad e institucionalidad en el gobierno de Correa

Jorge León T.*

El actual gobierno de Rafael Correa aparece como el ganador en la clásica disputa ecuatoriana entre legislativo y ejecutivo, a través de acciones no siempre legales e institucionales. A pesar de esta devaluación de normas democráticas y del Estado de derecho, de modo revelador, nunca antes un presidente ha logrado tanta popularidad. El jefe de Estado ecuatoriano exhibe la mejor cuota de aceptación en el mundo (76%). En contraste, la aceptación en la opinión ciudadana de los partidos, y sobre todo del Congreso, nunca ha sido tan baja (4%). Los grandes perdedores son los partidos y el Congreso englobados, sin distingo, en la llamada 'partidocracia' que de manera simplista es considerada la encarnación del 'mal'. De acuerdo al discurso del gobierno y su énfasis en la promoción de una revolución ciudadana, la sociedad civil sería el actor principal de los actuales procesos de cambio. Sin embargo, ante la crisis de los partidos, no es una ciudadanía activa la que toma su lugar sino un discurso ciudadano sin ciudadanía organizada, vehiculado, sobre todo, por sectores de la izquierda que sirven ocasionalmente de apoyo para movilizaciones y fuerza de choque. Al estilo bonapartista, la figura de Correa se impone a las diferencias de organización, intereses y tendencias. Y esto ocurre

hasta el punto en que se valoriza la legitimidad del cambio y del gobierno en detrimento de la legalidad.

¿Cómo se ha llegado a este resultado? Lo analizaremos en este artículo, en un primer momento, identificando las acciones y propuestas del gobierno, para caracterizarlo por sus hechos. En un segundo acápite, analizamos las respuestas de los principales miembros del Congreso ante la estrategia política gubernamental. Por último, proponemos algunas conclusiones sobre las consecuencias de las acciones del gobierno sobre el sistema institucional, en particular el legislativo, y sobre su relación con la sociedad civil.

Del programa de gobierno al ejercicio del gobierno

Una de las características sobresalientes del gobierno de Correa es que trata de hacer realidad su programa y propuestas de campaña, por generales que hayan sido. En efecto, el gobierno ha fortalecido su imagen reivindicando que cumple con sus promesas y que sus acciones corresponderían con sus palabras.

Más allá de su programa oficial, en los hechos sobresalen tres dimensiones de las acciones guber-

* Político, investigador y analista

naméntales: la idea de ‘poner orden en la casa’ reorganizando al Estado; el establecimiento de nuevas políticas públicas; y, la promoción de procesos de redistribución, orientados a frenar el poder de la oligarquía y a superar la visión patrimonial del Estado.

Del desorden al orden

Frente al desorden que habría creado el neoliberalismo (“la larga noche neoliberal”, según Correa) con la destrucción del Estado, una tarea sobresaliente del gobierno es, precisamente, la reconstitución del Estado. Implícitamente, este proyecto supone que no puede haber ‘orden’ sin Estado ni construcción de una economía sana sin un rol director del Estado. En ciertos casos, si se busca extender las ventajas de ciertos servicios públicos y obtener más ingresos fiscales, el Estado sería incluso su mejor garante. Esto se ha señalado reiteradamente para el caso del petróleo y la energía eléctrica.

Esta visión neokenesiana del rol del Estado es bastante clara en la propuesta de restablecer la planificación estatal. Sin embargo, no se trata de la visión del período ‘desarrollista’, sino de una concepción según la cual el rol del Estado ha de ser el de orientar e incitar las acciones de la sociedad. En los hechos, esta posición se traduce en la creciente presencia de representantes del ejecutivo en entidades públicas. Es esto justamente lo que está aconteciendo en entidades financieras como el Banco Nacional de Fomento, la Corporación Financiera de Fomento, la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia de Compañías. Lejos de una lógica

Ante los éxitos de Correa en imponer sus posiciones y poner simbólicamente en jaque a sectores pudientes, no faltan quienes lo ven como un redentor. A ello, por lo demás, contribuye el presidente con sus simbolismos y retórica.

estatista o de estatización, el gobierno estaría promoviendo una dinámica característica de algún socialismo del siglo XIX: definir un marco de funcionamiento para que se construya un sector empresarial que acepte responsabilidades con el Estado y sus normas, pero que, en compensación, tiene garantizados sus derechos. SENPLADES (la secretaría encargada de la planificación) ha adquirido así un rol que ya había perdido y actualmente participa incluso en decisiones consideradas secundarias.

Podríamos concluir que, más allá de los discursos y por la fuerza de los hechos, el gobierno se orienta a recuperar el rol del Estado en el funcionamiento de la economía. Nos encontramos, así, en una fase de contraposición o negación del desmontaje del Estado operado durante el anterior período.

¿Hacia un bonapartismo contra los corporativismos e intereses particulares?

Junto a este aspecto, otras acciones más bien problemáticas del gobierno alimentan su apuesta de ‘poner orden’. La idea de ‘refundar’ la sociedad y el Estado es frecuente en los discursos presidenciales. Si bien en estos discursos se señala como referentes a hitos históricos importantes (como la gesta de Simón Bolívar o, sobre todo, la de Eloy Alfaro), se trata de procesos lejanos. Esto permite poner de relieve a la actuación de Correa, quien enfatiza la necesidad de destruir el orden existente para construir uno nuevo. En su entorno se disputan diversas orientaciones sobre democracia y autoridad. Para unos, esta ‘misión’ de cambio requiere de un presidente con ‘plenos pode-

res’ y con una legitimidad que lo vuelva intocable. Este bonapartismo puede fácilmente convertir a Correa en una figura caudillista que, con poder suficiente para ubicarse por encima de la diversidad de intereses, alimente la dependencia de las masas. Ante los éxitos de Correa en imponer sus posiciones y poner simbólicamente en jaque a sectores pudientes, no faltan quienes lo ven como un redentor. A ello, por lo demás, contribuye el presidente con sus simbolismos y retórica.

Sin embargo, todo esto contrasta con la tarea histórica de definir una identidad colectiva a partir del ciclo de protestas recientes (de donde, cabe resaltarlo, emerge el propio Correa). El cambio histórico, ciertamente, no nace con Correa ni se agota en él. Pero por encima de las tendencias e intenciones, sobresalen los comportamientos presidenciales de establecer un nexo directo con la población, sin la mediación de la organización política o la ideología.

Políticas públicas y políticas de gobierno

El actual gobierno busca elevar algunas políticas públicas a la altura de políticas de Estado. Esto se puede observar claramente en el campo energético. En lugar de continuar con la política de aprovechar las ventajas inmediatas de mercado de este producto, el gobierno propone considerar que, a futuro, el Ecuador no dispondrá de petróleo. Por ello, más conveniente resulta exportar con parcimonia o, inclusive, dejar de hacerlo. A su vez, se señala, desde ya se debe invertir en energías alternativas de todo tipo. En síntesis, no es una lógica a corto plazo de mercado la que en este caso predomina, sino la búsqueda de una política de Estado que, defendiendo el interés general, prevea las conveniencias del largo plazo y no se reduzca a la búsqueda de rentabilidad del momento. Algo similar acontece en las carteras de Bienestar Social, Obras Públicas o Agricultura. Esto indicaría una voluntad por racio-

nalizar las políticas gubernamentales con una concepción del largo plazo y del interés colectivo, sin priorizar la mediación del mercado.

En contraste con el propio discurso presidencial, el actual gobierno está compuesto por un sector tecnócrata que, hasta ahora, privilegia la racionalización de las políticas públicas a partir de un Estado que estaría por encima de los intereses particulares. En la construcción de este nuevo Leviatán, como ha sido común en casos similares, resulta secundario negociar con (o en el límite, reconocer a) los agentes sociales, cuando la prioridad sería crear las condiciones para que la nueva ‘razón’ predomine. En el caso extremo, la ‘razón’ no puede perderse en las razones de los otros, y si es necesario, la legitimidad presidencial permitirá o deberá imponer las condiciones para su ejercicio. A manera de reparo, vemos que este proceso de racionalización del Estado y de las políticas públicas provee de justificativos a varios miembros del gobierno para concebir al predominio del poder presidencial como una premisa de acción. De este modo, los ímpetus de Correa encuentran racionalizaciones legitimadoras.

La redistribución y las posiciones antioligárquicas

La lógica de racionalización de las políticas públicas a la que nos hemos referido se complementa, por un lado, con propuestas redistributivas, y por otro, con medidas para limitar el poder de la ‘oligarquía’ (en su acepción clásica, la oligarquía es el sector privado que ha concentrado poder económico y político haciendo del Estado un medio de gestión de intereses privados).

En cuanto a las propuestas redistributivas, el gobierno ha incrementado varios subsidios para los sectores más pobres. Tal es el caso del incremento del Bono de Desarrollo Humano (ex Bono de Pobreza), del subsidio para préstamos de vivienda,

de la prolongación de pagos para agricultores medios en el Banco Nacional de Fomento, de la eliminación de pagos mínimos en los servicios hospitalarios o en las escuelas, y del restablecimiento de los préstamos hipotecarios en el Instituto de Seguridad Social (IESS). Estas políticas han sido justificadas como medios indispensables para una compensación de las desigualdades sociales. Ciertamente, ello contrasta con las medidas de los gobiernos anteriores que destinaron ingentes recursos a favor del sector pudiente (piénsese, por ejemplo, en el salvataje bancario).

Desde una perspectiva económica, el gobierno considera que incrementar los subsidios a los más necesitados favorecería la producción y el mercado internos. Pero, a pesar de que estas propuestas redistributivas podrían favorecer el incremento de las importaciones (ahora centradas en bienes de consumo corrientes), este incremento de los gastos del Estado no cuenta con garantías de nuevos ingresos en el medio plazo. Además, estas medidas no necesariamente son consecuentes con la racionalización de las políticas públicas o con la visión de una ciudadanía organizada y activa en resolver sus problemas. Si este fuera el caso, el Estado apoyaría a la ciudadanía con propuestas más generales y globales de servicios (de salud y educación principalmente) que lleguen a todos los sectores y contribuyan a consolidarlos socialmente.

En todo caso, si bien estas medidas redistributivas responden a varios criterios (entre otros a la estrategia política del gobierno, como veremos), revelan una clara intención de llegar desde el Estado a los sectores más pobres. En este sentido, se trata de un cambio radical frente a las políticas que han predominado en los gobiernos anteriores.

Por otro lado, las propuestas antioligárquicas del gobierno buscan contrarrestar el predominio de ciertos sectores pudientes que controlan entidades

estatales o que han definido políticas funcionales a sus intereses particulares sin que sean, precisamente, útiles para el conjunto del sector empresarial. (Tal es el caso del sector bancario, o de sectores vinculados a los servicios en el sector eléctrico o petrolero).

El aspecto más sobresaliente a este respecto es la polarización del presidente frente a los sectores pudientes de Guayaquil. Tradicionalmente, las demandas de este sector –vehiculadas por la municipalidad de Guayaquil, la Junta Cívica (que congrega a familias de notables), las cámaras empresariales o, más directamente, por el Partido Social Cristiano (PSC)– han recibido atención privilegiada por parte del gobierno central. Pero esta vez, estas demandas se encontraron con un decidido rechazo. El discurso gubernamental señaló que no se trataba de demandas de Guayaquil sino del sector de “pelucones”. Asimismo, el gobierno de Correa ha apoyado la constitución de una nueva provincia en la península de Santa Elena. Esta escisión de la provincia del Guayas fue presentada por la propia élite de Guayaquil como un fraccionamiento o debilitamiento de sus inversiones y su poder. La polarización, fundada en epítetos y mutuas descalificaciones sobre quién encarnaría al pueblo, condujo a una medición de fuerzas a través de movilizaciones populares. Haciendo un balance de esta contienda, es claro que el alcalde Jaime Nebot no consiguió movilizar a tanta gente como lo hizo el gobierno.

Podríamos entonces concluir que asistimos a una pérdida del poder del sector hegemónico en Guayaquil. El PSC (que alimentaba la simbiosis entre poder económico y político) ha perdido adhesiones, poder de presión sobre la gente y legitimidad. Este partido ya no obtuvo la misma votación en las dos últimas elecciones (esto incluye la candidatura de su conocido líder León Febres Cordero), no ha logrado movilizar a sus sectores de apoyo y

su discurso está siendo devaluado y ridiculizado por el presidente Correa. Como contraparte, el gobierno ha logrado ganar presencia, adherentes y reconocimiento en los sectores populares y medios de Guayaquil (antes reductos sociales cooptados por el PSC). Sin embargo, esto no impide que la élite guayaquileña todavía logre gran parte de sus metas y demandas. Correa parece privilegiar el impacto público de la polarización antioligárquica, pero en lo demás ha respondido a varias demandas y objetivos de este sector.

Diversos cambios sociales, ya en curso desde antes del gobierno de Correa, explican la pérdida de poder del grupo de Guayaquil. Pero en el juego político actual, es el gobierno quien consigue canalizar el cambio y el descontento. Incluso ha logrado acelerar el proceso al desprestigiar el predominio de esta élite y valorizar la adhesión popular a sus propuestas. Este es uno de los cambios actuales más importantes. Por lo demás, los ciclos contrastados entre ‘oligarquización’ y su polo opuesto son una constante en América Latina y una manifestación de la fragilidad de nuestras instituciones.

El Congreso y los partidos políticos

Junto al PSC y la oligarquía guayaquileña, el Congreso aparece como la institución perdedora en medio del proceso de cambios en curso. Incluso, la opinión pública legitima actualmente la idea de clausurar al Congreso: unas voces lo proponen desde una visión autoritaria, otras desde la crítica a su pretendida inoperancia, pero de modo predominante sobresale su falta de legitimidad.

Desde hace años, las disputas en la función legislativa (propias de una sociedad tan fraccionada en lo político y con fuertes polarizaciones sociales) han suscitado fuertes rechazos. Era en este espacio donde se tomaban buena parte de las decisiones favorables al sector pudiente de la sociedad y

donde se exhibían acuerdos de intercambios de favores o prácticas de corrupción. Así, los representantes del Congreso (y con ellos los partidos) han terminado por encarnar lo condenable de la política. Adicionalmente, la prensa ha generalizado la idea de que el mal del Ecuador proviene de la llamada ‘partidocracia’ o del abuso de poder de los partidos. El desprestigio de los partidos y su consiguiente pérdida de representación, sirvió a Correa en la campaña electoral para presentarse como la figura antisistema, reforzando la idea de la encarnación de lo negativo en los partidos. Y ya en el gobierno, este discurso ha permitido al presidente condenar al Congreso y por ende a la oposición. Por su parte, la frágil mayoría, hoy ya inexistente, compuesta por los partidos opuestos al gobierno de Correa (PSC, PRIAN, PSP y UDC) no tuvo una posición siempre definida y coherente. Este bloque opositor no logró articular bien sus posiciones debido, no sólo a sus diferencias ideológicas internas, sino a cálculos circunstanciales de intereses (en particular de Lucio Gutiérrez).

Al asumir el poder, el gobierno convirtió la propuesta de realizar la Asamblea Nacional Constituyente en su prioridad. Ello suscitó la definición de posiciones. Gutiérrez, que con anterioridad a Correa había hecho la misma propuesta, la apoyó desde un inicio. Adicionalmente, el PSP había logrado otros acuerdos con el gobierno relacionados con nombramientos a puestos claves (tal el caso del contralor designado por el PSP). Esto permitió que el gobierno, desde un inicio, asegure una mayoría en el Congreso. Junto al PSP, se proyectaba que esta mayoría esté compuesta por la ID, MPD, Pachakutik, PSE-FADI, Red y Ciudadanos Nuevo País. La propuesta de la asamblea tendría así una mayoría legislativa para ser aprobada. Sin embargo, el PSP tenía una estrategia diferente a la del gobierno. Mientras este partido buscaba retardar el

inicio de la asamblea para que Lucio Gutiérrez capte más adherentes y pueda convertir al PSP en la principal fuerza política, el gobierno contaba con realizar la asamblea de inmediato aprovechando la popularidad del presidente para obtener, también, una mayoría de asambleístas. En este caso, como en otros, a pesar del acuerdo en el objetivo no coincidían los tiempos.

Los otros partidos de oposición, en cambio, consideraban indispensable iniciar reformas constitucionales en el Congreso para deslegitimar la asamblea

constituyente. Pero en un momento en que la idea de la asamblea ya era ampliamente aceptada, esta posición suscitó rechazos y desaprobación: esta postura aparecía como una estrategia para defender viejos privilegios. El PSP, por su lado, jugaba a cambiar las mayorías y tenía acuerdos con los otros partidos de oposición sobre nombramientos de personas afines al PRIAN o al PSP a puestos públicos. En este marco, el PSP logró la expulsión de dos de sus diputadas (por estar a favor de la asamblea sin seguir las posiciones de Lucio Gutiérrez) irrespetando los procedimientos debidos. Todo el juego político en el Congreso revelaba la práctica del cálculo circunstancial y del intercambio de favores, y terminó por deslegitimar aún más esta institución. Preso en negociaciones dudosas, cuando la idea de la asamblea ya fue difundida como el medio que pondría fin a estas prácticas, el Congreso aparecía como el espacio de la 'vieja política'. La mayoría opositora, además, suscitó todavía más rechazos planteando propuestas completamente inapropiadas para el contexto (por

Con una oposición descompuerta y sin capacidad de iniciativa, Correa casi tiene el monopolio de las propuestas. En este contexto, todos los partidos se encuentran en una situación similar. Esto incluye a los aliados del gobierno, pues la condena del calificativo 'partidocracia' no hace distinciones entre los partidos.

ejemplo, la tentativa de incrementar los salarios de los diputados cuando el presidente reducía el suyo o, más tarde, intentar destituir sin fundamentos a los miembros del TSE).

Sin tener un sólo diputado en el Congreso (sino únicamente aliados) y haciendo de la asamblea constituyente su caballo de pelea, el gobierno de Correa ha prevalecido sobre sus oponentes. Con una oposición descompuerta y sin capacidad de iniciativa, Correa casi tiene el monopolio de las propuestas. En este

contexto, todos los partidos se encuentran en una situación similar. Esto incluye a los aliados del gobierno, pues la condena del calificativo 'partidocracia' no hace distinciones entre los partidos.

Conclusiones: una primera caracterización del gobierno de Correa

Al gobierno de Rafael Correa le van mal las comparaciones tanto con otros gobiernos del continente como con los gobiernos recientes del Ecuador. Un gabinete más bien tecnocrático, con buen número de miembros ecologistas y con una visión racionalista de sus acciones, contrasta con la permanente campaña electoral en que se encuentra su presidente. En esta campaña polarizante, Correa puede fácilmente alternar adjetivaciones con descalificaciones sobre aquellos que no coinciden con sus criterios. El esfuerzo notorio de institucionalización democrática de políticas públicas que realiza el gabinete, contrasta con el uso de normas legales o procedimientos de un modo poco institucional y de derecho.

Llama la atención la institución de Correa como un líder situado encima de cualquier organización política. En el entorno del presidente, se está alimentando la idea de que es necesario un 'líder' para imponer los cambios promovidos por el gobierno. Paralelamente, hasta ahora la organización política no ha sido la prioridad: se ha privilegiado el nexo 'líder'-masas, poniendo entre paréntesis la mediación política, o bien, el papel de la organización.

En varios aspectos, se puede considerar que el actual gobierno es cercano a las corrientes de izquierda. Esto se aplica, en particular, a las nuevas pautas redistributivas, a la racionalización de políticas, a la preeminencia del rol director del Estado en la intervención económica, y a los aspectos antioligárquicos. Sin embargo, sorprende la ausencia de un programa o concepción explícita que oriente y defina las acciones del gobierno. Hasta ahora predomina, más bien, un proceso de 'negación'. Es decir, prima la actitud de atizar el rechazo frente a la situación anterior por sobre la construcción de una visión de futuro (lo que sería propio de un programa ideológico). Llama todavía más la atención que el gobierno se proclame portavoz de una 'revolución ciudadana' sin que haya una visión de ciudadanía, ni una concepción de lo que ésta podría ser. Sorprendentemente, un equipo compuesto por varios intelectuales hecha en falta orientaciones ideológicas para dar sentido al camino por andar. El adagio 'se hace camino al andar' ciertamente tiene una clara limitación en las acciones colectivas.

La acción del gobierno de Correa se empeña en desmontar el sistema de modernización neoliberal (al menos de lo que en Ecuador pudo hacerse) y en superar el reciente período de predominio oligárquico. Su medio principal ha sido la redefinición del rol del Estado y la racionalización de las políti-

cas públicas. El equipo tecnócrata del gobierno concibe su tarea como la constitución de una nueva razón de Estado en la que predomina más la idea de un plan que asume un interés general que una acción fruto de acuerdos y negociaciones con los agentes sociales. Debido a que los intereses socioeconómicos y corporativos de diversos grupos de poder no necesariamente concuerdan con esta propuesta, en el gobierno de Correa se están construyendo justificativos para que el presidente disponga de un poder incontestable, situado por encima de toda organización.

Las políticas públicas y la propuesta antioligárquica tienen amplia aceptación y otorgan a Correa de una legitimidad excepcional. Esto, precisamente, le está permitiendo situarse por encima tanto de organizaciones sociales o políticas como de normas legales e institucionales con un discurso anticorporativo. Así, en la sociedad ecuatoriana se estaría construyendo la idea de que si las acciones del mandatario tienen buenas intenciones y razones, sería legítimo poner de lado las instituciones y la ley.

La demanda de orden y estabilidad, y la apuesta por poner coto al abuso del poder característica de los períodos recientes, actúa como una racionalización de las tendencias autoritarias que se están formando en la sociedad. Este fenómeno tiene como complemento el abandono de la protesta por parte de sectores sociales y su entrega al liderazgo de Correa. El matrimonio que se está construyendo entre la entrega a las manos de un dirigente que se concibe a sí mismo como predestinado a redimir al pueblo, y las racionalizaciones que se crean para que disponga de un poder incontestable, puede conducir a la constitución del pueblo como un sector anónimo de apoyo. La relación directa entre un dirigente y la gente, sin la mediación de organización política alguna, termina por vaciar la política y

convertirla en el apoyo a la buena razón que encarna el presidente. Es precisamente por ello que ya se percibe una ‘revolución ciudadana sin ciudadanía’, así como una valoración de lo indígena sin indígenas como actores, y una valoración del pueblo sin la acción de sus organizaciones. En la relación directa dirigente-masas, la razón del primero anula las razones colectivas.

El discurso y las acciones cargadas de simbolismo de Correa, frecuentemente reivindican un pasado presentado como el fundamento de la sociedad ecuatoriana. Los rituales y normas conservadoras de la religión y la Iglesia católicas realizan algo similar. En uno y otro caso, afirmar pertenencias primarias al pasado, alimentan el sentimiento de seguridad y estabilidad. Con ello, no se deja espacio para la renovación (no se trata de la religión de la fase renovadora) sino sólo una ratificación de lo dado y de la simple pertenencia. Este conservadorismo actualmente responde a una demanda social de estabilidad. La articulación entre conservadorismo y cambio que Correa encar-

La sociedad con sus demandas de estabilidad y con el agotamiento de las organizaciones de protesta, está abandonando su rol activo o protagónico para preferir a un redentor que ponga orden mientras la razón tecnocrática y las características de Correa concuerdan en querer plenos poderes.

na bien en sus posiciones y en su persona, está legitimando la idea que el nuevo orden no debe tener contestatarios y que la razón de este proceso de cambio requiere ‘mano dura’. Así, la sociedad con sus demandas de estabilidad y con el agotamiento de las organizaciones de protesta, está abandonando su rol activo o protagónico para preferir a un redentor que ponga orden mientras la razón tecnocrática y las características de Correa concuerdan en querer plenos poderes.

Este encuentro entre una población que demanda orden y estabilidad, por un lado, y la demanda de poder por parte del gobierno, está construyendo un liderazgo característico de los clásicos del populismo o de los gobernantes de larga duración, precisamente porque responden a demandas de una sociedad que se erosionó con la desestabilización anterior. La relación de reciprocidad entre demandas primarias de orden y necesidades sociales primordiales con un dirigente político que encarna poder, orden y cambio puede ser de larga duración.

